

LOS VALORES DEMOCRATICOS Y LA TRANSFORMACION ESTRUCTURAL

LIC. JUAN MANUEL VILLASUSO*

ECONOMISTA CATEDRATICO, ESCUELA DE ECONOMIA, UCR

Un mundo en transformación

Al acercarnos al siglo XXI nuestra civilización se transforma de manera vertiginosa. Criterios y conceptos consagrados por los siglos se esfuman y renuevan. Ideologías hegemónicas desaparecen en beneficio de una nueva imagen de la humanidad. Las distancias se acortan, el tiempo se comprime y nos hace espectadores de un planeta cuyas imágenes desfilan ante nuestros ojos en las pantallas de televisión.

Somos testigos de la caída de muros que han separado a los hombres y han constituido la ignominia de la Libertad y la Justicia. Vemos elevarse hacia el espacio el fruto de la tecnología en búsqueda de nuevos horizontes y de explicaciones para nuestro propio origen. Observamos cambios genéticos provocados por la especie humana que intenta simular la Génesis y nos deslumbran máquinas que buscan reproducir el músculo y la mente.

Vivimos un mundo fascinante, una vorágine de cambio, una revolución multidimensional. La ciencia-ficción se torna realidad y modifica las relaciones entre los hombres y entre las naciones. El mapa político y económico adquiere nuevas tonalidades y los peligros y las oportunidades se entrelazan para construir nuevos escenarios en los que el desarrollo y el bienestar comparten el planeta con el atraso y la miseria.

La política se humaniza. La dignidad de las personas y el respeto al individuo son cada vez más importantes en los sistemas de convivencia nacional. En América Latina se han

ido extinguiendo las dictaduras militares y se ha iniciado un difícil proceso democrático que con altibajos intenta consolidarse. Igualmente vemos con satisfacción los acelerados procesos democratizadores de Europa del Este y de la Unión Soviética, aunque las luchas fratricidas empañan su devenir.

Pero este mundo en evolución tiene en su vientre semillas de contradicción. El triunfo de la ciencia y la tecnología convive con una creciente deshumanización de la economía.

Cada día el ser humano está más desprotegido. Hay más desempleo y más pobres en el mundo que veinte años atrás. Se busca disminuir los grandes desajustes macroeconómicos, pero no existe la misma preocupación por reducir los enormes desequilibrios sociales que provocan desigualdad e inestabilidad en las sociedades.

La humanización de la política conduce a elevar las aspiraciones en cuanto a calidad de vida pero las economías contemporáneas no parecen estar en capacidad de llenar esas aspiraciones en la mayoría de los pueblos. La conquista de la libertad y de la democracia política constituye un extraordinario logro para naciones que han vivido en la oscuridad de la dictadura, pero no se puede vivir tan solo con libertad y democracia; es necesario mayor participación en la distribución de la riqueza nacional.

Mientras en los países desarrollados se abre la pers-

* El autor participó en representación del Expresidente de la República Luis Alberto Monge A.

pectiva de un avance histórico en cuanto a productividad y bienestar material, con la adopción de nuevas tecnologías, la distancia económica y social entre los países industrializados y las naciones subdesarrolladas aumenta continuamente. El estancamiento económico en los países pobres está originando procesos de empobrecimiento paulatino de la población trabajadora y conduce hacia la marginalidad a sectores crecientes de la población.

La búsqueda desesperada para restablecer el crecimiento nos lleva a un uso excesivo e irracional de los recursos naturales, agotando materias primas y fuentes de energía que ponen en peligro el medio ambiente y el futuro de las próximas generaciones.

Aún se observan importantes sectores campesinos que no han logrado acceso a la propiedad de la tierra ni a los requerimientos e innovaciones indispensables para la producción. La economía informal se ha constituido en una última opción para miles de ciudadanos que buscan sobrevivir ante la crisis y el ajuste, aunque esta solución solo les garantice condiciones infrahumanas de vida.

Esta dualidad prevaleciente en el mundo, esta dicotomía entre el progreso y el estancamiento, entre el bienestar y el hambre, constituye el entorno en el que se halla inmersa nuestra Costa Rica de fines de siglo. Constituye el reflejo de nuestras propias interrogantes. Representa, de manera cruda y descarnada, la disyuntiva que encara nuestro país.

Los próximos años contienen, minuto a minuto, el reto de nuestro futuro y las opciones de nuestro porvenir. Así como los años ochenta significaron para Costa Rica la superación de la crisis más profunda de su vida institucional contemporánea y el cuestionamiento de su modelo de desarrollo, así los años noventa llevan implícitos las tareas de la redefinición.

Los valores democráticos costarricenses

Es indispensable que los costarricenses, a través del diálogo y el censo redefinamos aspectos fundamentales de nuestro Estado, de nuestra estructura económica y de nuestras relaciones sociales. Esta redefinición, necesaria y urgente, debe sustentarse en los valores más profundos de la nacionalidad costarricense y en los principios éticos y morales que le han servido de apoyo y sostén. Esos valores y principios, tal y como acertadamente enumera el historiador Eugenio Rodríguez Vega, no son otros que la libertad, la justicia social, la tolerancia, la civilidad y la paz.

La libertad para los costarricenses es una vivencia y se

manifiesta como el clima indispensable para que todos puedan convivir en una Patria digna, sin censuras y sin temores. El desprecio de la libertad conduce inexorablemente a la miseria moral y a la infelicidad de todos.

La justicia social, por la que tanto se ha luchado durante años y por la que tendremos que continuar batallando con espíritu visionario, es la piedra angular sobre la que descansa la solidaridad hacia los compatriotas más desposeídos. La justicia social no es una quimera, sino un camino de lucha que se transita con la convicción de que no hay vida democrática posible en medio de la injusticia.

La tolerancia conforma la esencia misma de nuestro régimen político. Un sistema auténticamente democrático demanda una ilimitada posibilidad de discrepancias, por lo que es inútil aspirar a que todos defiendan la misma bandera política, se afilien a la misma religión, o compartan la misma estrategia en las luchas sociales y económicas. Hay un valor insospechado en el pensamiento de las minorías y vale la pena garantizar que sus voces se escuchen libremente para mantener intactas las semillas de las futuras transformaciones.

La civilidad costarricense representa, frente a las experiencias latinoamericanas y de otras latitudes, un principio con hondas raíces en nuestra historia y un valor irrenunciable del pueblo. La proscripción del ejército en 1949 reflejó ese sentimiento unánime de repudio a los galones y las charreteras.

Finalmente, la paz es otro de los valores y principios supremos de la nacionalidad costarricense. La paz no es egoísmo ni premio a la indecisión, sino una ardua conquista lograda con el viril esfuerzo de todos los días. Es el resultado natural de la vigencia de los demás valores, porque no hay paz posible si se atropella la libertad, si no se trabaja realmente por la justicia social, si desaparece la tolerancia para la libre discusión de las ideas, si se impone sobre el razonamiento objetivo la fuerza de las decisiones militares. Esa es la paz activa que defendemos los costarricenses; no el sentimiento cobarde de vivir tranquilos aunque desaparezcan los otros valores.

Es justamente sobre los sólidos cimientos que representa este conjunto de valores que debemos redefinir nuestro Estado, nuestra estructura económica y nuestras relaciones sociales.

La construcción de un Estado más democrático

No cabe duda que la Constitución Política de 1949 significó el inicio de una nueva etapa en el desarrollo del Estado costarricense. A través de los años el accionar de las institucio-

nes públicas contribuyó de manera significativa a la construcción de la infraestructura física de nuestro país. Caminos, carreteras y puentes permitieron unir a los pueblos más remotos con la Meseta Central. La electricidad se convirtió en una realidad para la gran mayoría de los costarricenses. Los sistemas telefónicos más modernos nos pusieron en contacto con el resto del mundo. Esos son frutos tangibles del accionar de nuestro Estado.

En el campo de la salud, decenas de hospitales y centros de asistencia médica se localizaron a lo largo y ancho de nuestra geografía reduciendo la mortalidad y la morbilidad en la población. Numerosos y costosos programas de medicina preventiva se llevaron a cabo para erradicar enfermedades que agobiaban a muchos hogares. La construcción de acueductos alcanzó niveles insospechados para una nación pobre como la nuestra y los programas de nutrición por medio de los comedores escolares se convirtieron en ejemplo para otros países.

La educación se esparció por todo el territorio nacional y el esfuerzo por edificar aulas y capacitar maestros y profesores demandó una clara voluntad política que se expresó de manera reiterada en los presupuestos nacionales. Más del 30% del gasto del Gobierno Central se destinó a la formación de nuestro capital humano.

Sin embargo, conforme el Estado forjaba la infraestructura física y humana necesaria para sustentar el desarrollo, las instituciones gubernamentales fueron adquiriendo vicios y acumulando deficiencias. Poco a poco el centralismo, el burocratismo, la ineficiencia y la ineficacia se fueron adueñando de los entes públicos. Poco a poco las demandas sociales fueron quedando insatisfechas, aunque el Estado crecía y reclamaba mayores cantidades de recursos. Poco a poco los organismos oficiales fueron convirtiéndose en un fin en sí mismos, olvidando sus responsabilidades con los ciudadanos y desconociendo una de sus finalidades esenciales: la de materializar y hacer operativo el principio de SOLIDARIDAD.

Esta evolución degenerativa del Sector Público exige, sin duda alguna, una redefinición urgente de los papeles que corresponden a las instancias públicas y los que competen a la sociedad civil. Es imperativo redefinir el Estado, pero hay que hacerlo conforme a las necesidades actuales y las expectativas futuras de la sociedad costarricense, y no siguiendo designios ideológicos de moda en otras latitudes.

Es necesario fortalecer al Estado para orientar el proceso de desarrollo y promover la justicia social, pero también es indispensable darle a los ciudadanos mayor participación en los procesos de toma de decisiones y mayores posibilidades de

realización personal. El Estado paternalista debe dejar espacio para que germine un nuevo Estado, más participativo y descentralizado, y para que la iniciativa privada pueda gestarse en forma autónoma.

Requerimos de un Estado más eficiente, que oriente con eficacia la producción y mitigue las desigualdades sociales. Pero esto no puede lograrse comprimiendo dogmáticamente al sector público y confiando en que las señales de mercados imperfectos y poco evolucionados se encargarán de lograr una mejor asignación de los recursos y del «derrame» de los beneficios del progreso sobre los grupos mayoritarios de la población.

Democracia implica libertad y participación; y el Estado debe garantizar la existencia de estos dos elementos. Es el Estado, como superestructura social, el que tiene la responsabilidad de velar para que cada ciudadano tenga la posibilidad de manifestarse libremente y participar en los procesos políticos, sociales y económicos. Un Estado débil y desdibujado no podría cumplir a cabalidad esa misión.

La inserción en la economía mundial

Conforme se acerca el siglo XXI se intensifica la interdependencia entre los países. Los avances tecnológicos, los satélites, las telecomunicaciones, las computadoras y el mundo de los robots permite una interconexión entre los esquemas económicos verdaderamente extraordinaria. Los sistemas financieros de las potencias industriales se encuentran integrados a nivel mundial y nada de lo que ocurre en Nueva York pasa desapercibido en Londres, París, Tokio, ... o San José.

Las empresas cada día se articulan más con el concepto de capital internacional y rebasan las fronteras nacionales. Las coinversiones, fusiones y subsidiarias de firmas transnacionales hacen prácticamente imposible identificar su origen. Vivimos en un mundo económico donde la ciudadanía ha perdido su significado.

Esta realidad no puede y no debe pasar inadvertida para Costa Rica. Es necesario, por lo tanto, diseñar nuestras propias fórmulas de inserción en la economía mundial. Fórmulas que preserven nuestros valores y que permitan desarrollar nuestras ventajas comparativas y competitivas; que garanticen nuestra democracia y aseguren bienestar a las grandes mayorías; que nos permitan vivir en paz sin claudicar ante las presiones de las naciones poderosas.

Es por estas razones que Costa Rica debe perfilar, con la mayor claridad posible, un horizonte de desarrollo económi-

co, social y político. No es posible navegar hacia el futuro sin objetivos y metas claros y sin un derrotero que nos guíe. No es conveniente que sigamos, sin cuestionamiento, el rumbo que tratan de fijar quienes creen ciegamente en los mercados y privilegian lo económico, aún y cuando ello se contradiga con lo social y lo político.

Debemos buscar una nueva inserción en la economía internacional, fomentar la excelencia en la producción y aspirar a mayores niveles de competitividad en nuestra agricultura, nuestra industria y nuestro sector servicios. Pero esta reconversión del aparato productivo debe llevarse a cabo conforme a nuestros propios intereses y promoviendo bienes y servicios en forma selectiva. El aperturismo indiscriminado pondría en peligro muchas actividades que generan empleo y garantizan la subsistencia de gran número de costarricenses.

Aumentar las exportaciones no es un fin en sí mismo. Es tan solo un instrumento para mejorar los niveles de vida de la población y para dinamizar y consolidar la estructura productiva. Es por ello que los procesos de ajuste estructural deben incluir un ingrediente distributivo que evite el enriquecimiento de unos pocos, y debe tener en cuenta los «encadenamientos» de la producción que conduzcan a un desarrollo balanceado.

Debemos superar la estabilización financiera de corto plazo y reactivar la economía nacional. Los objetivos de la estabilización, si bien son deseables desde el punto de vista macroeconómico, no pueden prevalecer sobre las necesidades de crecimiento y desarrollo. Las políticas recesivas podrían ser válidas como solución a problemas coyunturales, pero no pueden constituirse en fórmulas permanentes para países pobres donde amplias mayorías reclaman mejores condiciones de vida. Es necesario asumir el riesgo de la producción, aún y cuando ello signifique afrontar algunos desajustes financieros en el corto plazo.

La responsabilidad ciudadana

Avanzar en las grandes transformaciones del Estado y de la estructura productiva demanda un esfuerzo de enormes dimensiones. Es por ello necesario que exista un convencimiento

nacional, un consenso cívico que transite hacia mecanismos legítimos e institucionalizados de concertación entre los distintos actores sociales. Se requiere de una acción concertadora promovida por las organizaciones civiles con vocación de cambio y con actitud de compromiso con el futuro del país.

El fortalecimiento democrático y la inserción en los mercados internacionales significa que los ciudadanos tienen que asumir nuevas responsabilidades. La posible asimetría entre delegación de responsabilidades por parte del sector público y la oportunidad de la sociedad civil para asumirlas, generaría un vacío institucional cuyas implicaciones serían negativas. Es por ello que el proceso tiene que darse por una acción concurrente de las instancias políticas y las comunidades y organizaciones privadas. Transferir no es solamente ceder, sino también aceptar.

En esencia, cambios estructurales como los que hemos esbozado conllevan una reafirmación de los valores nacionales, una redefinición de las funciones del sector público y de las modalidades e instrumentos más adecuados para cumplirlas, una visión de porvenir que nos ubique en el contexto mundial y nos permita ver los desafíos y oportunidades del mañana, un rol más activo de las organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos, y una voluntad nacional para desencadenar el proceso y apoyarlo a lo largo del camino.

Conciliar las realidades, restricciones y oportunidades del presente y del futuro con las posibilidades reales de expresión de deseos y necesidades de los diversos estratos sociales, constituye la gran tarea que nos depara lo que resta de este siglo.

Resumir en una estrategia propia y viable los requerimientos de los mercados internacionales, la mayor dependencia que presagia el mediano y largo plazo, y la voluntad de los costarricenses de continuar imprimiendo sus valores, sus creencias, sus virtudes, sus defectos y sus ilusiones a su propio futuro, es el paradigma cuya formulación encaramos como sociedad democrática al acercarse el nuevo milenio.